

## Para el sufragio efectivo, sí reelección

*Alfonso Páez\**

Nada resulta más evidente tras el primer año foxista que el crucial papel que los partidos juegan en nuestro destino colectivo. Cuando el festejo de la alternancia anunciaba que todo se explicaría por el color de las corbatas de los candidatos y su avasalladora mercadotecnia, nos encontramos de pronto en un ámbito público de resultados mediocres y explicaciones ausentes: un sistema presidencial medianamente inmóvil, dominado por las a veces incomprensibles decisiones de los partidos.

Lograda la democratización electoral, y su consecuencia más notoria, la alternancia, los partidos mexicanos viven su momento más crítico: a la par que se han dedicado a la incontrovertible misión de garantizar que se cuente el sufragio ciudadano, han erigido para sí una enorme fortaleza que corre el riesgo de engañarnos a todos y convertirse en endeble refugio ante la desaprobación generalizada.

El dilema central de nuestro sistema de partidos radica en su desconexión con las preferencias de sus electores. No deja de ser irónico que mientras que el 83% de los votantes expresaran en el 2000 una preferencia por partidos con propuestas económicas de derecha o centro-derecha, sus representantes en el Congreso hayan terminado aprobando en enero pasado un paquete fiscal que refleja con mayor claridad la plataforma por la que votó el 17% restante. Es tal vez una ironía mayor el que dicho resultado haya producido un episodio de singular rabia ciudadana a pesar de haberse derrotado una propuesta impositiva a todas luces impopular.

Por ello, la modernización política de México tiene mucho más que ver con la democratización profunda del entramado institucional mexicano que con los instrumentos constitucionales que

---

\* Agradezco a Azucena Rojas Parra su ayuda en la elaboración de este artículo.

regulan la relación entre los poderes. Por encima del bombo y platillo de la reforma del Estado, lo que urge en México es la reactivación de la reforma electoral que dio paso a la democracia federal con la que contamos desde 1996. Hoy es indispensable proteger a los partidos de sus posibles excesos; también es indispensable fortalecerlos, obligándolos a renovar su vínculo con los intereses sociales que dicen representar. Mucho se ha ganado con la democratización del sistema político. Es momento de emprender la democratización del sistema de partidos.

Ciertamente, parte del problema radica en que el mexicano es un sistema constitucional y partidista en el que el peso de las mayorías se expresa con dificultad: el presidente es electo por mayoría relativa, pero carece de instrumentos –como el decreto en materia de leyes generales o el veto sobre el presupuesto de la Federación, entre otros– para que su mandato se ejerza de forma eficaz ante una oposición que –en el entorno multipartidista actual– en su conjunto suma más votos y curules que el partido en el gobierno. Dicho sistema trae consigo también el riesgo de coaliciones casi unánimes como única regla de cambio legal factible y, peor aún, una total opacidad en la responsabilidad colectiva. Cuando todos ganan en la negociación legislativa, para nadie es claro quién responde por los efectos de cualquier medida específica. Es en este entorno en el que se gesta la insatisfacción ciudadana con la democracia en su conjunto.

Más allá de los cambios marginales que la reforma del Estado incluya para hacer del mexicano un sistema democrático un poco más mayoritario, resulta urgente también un cambio de concepción en la conducción gubernamental. La modernidad política exige reconocer que dicha actividad implica necesariamente la coexistencia competitiva de distintos proyectos de nación. En esta competencia, jugar a no ganar es traicionar la confianza ciudadana expresada en el sufragio, confundiendo al elector sobre la efectividad de su mandato.

Pero el problema de fondo radica en la combinación que resulta de acompañar la posible irresponsabilidad colectiva de los partidos políticos con la ineludible irresponsabilidad individual de quienes les dan vida y forma. La solución, por ello, se encuentra en los incentivos que habrán de enfrentar los actores esenciales

## Para el sufragio efectivo...

del ámbito público: esos hombres y mujeres que hacen de la búsqueda del poder su actividad profesional primordial. El ciclo virtuoso de la representación parte de la existencia de un buen número de aspirantes a cargos públicos ambiciosos y con talento, dispuestos a trabajar denodadamente por garantizarse las mayorías electorales que les permitirán tener una larga carrera política. Lograr que este esfuerzo de los deseosos de poder redunde en beneficio de la ciudadanía, es el acertijo esencial del diseño institucional. Bajo este enfoque, la prohibición constitucional en materia de reelección inmediata es sin duda el principal escollo para la mayor eficiencia de nuestro ejercicio democrático.

Para el sufragio efectivo, sí reelección. En la ausencia de reelección consecutiva, nada más frustrante para la ciudadanía que el mito de ejercer un castigo electoral por malos resultados. Y es que al conculcarle al votante su derecho a premiar al político bueno con su permanencia en el cargo, le estamos también impidiendo que sancione al político malo con la separación del mismo. Si dejamos al representante sin la posibilidad de acceder a un premio electoral por su buen desempeño, sólo podremos apelar a su entereza moral como catalizador de su esfuerzo en servir adecuadamente. Y si no estamos dispuestos a confiar en una solución de este tipo, ni siquiera en las relaciones laborales más triviales, usarla en la contratación de quienes controlan y administran el aparato del Estado resulta francamente escandaloso.

Pero las lacras de este resabio del México premoderno no terminan ahí, y de hecho se encuentran en lo que otros insisten en señalar como sus grandes virtudes. A la no reelección debemos, dicen sus apologistas, la movilidad política evidente que se genera al interior de los partidos. Ésta incluye la posibilidad de que nuevos políticos accedan constantemente a los cargos de elección y que los experimentados circulen por toda la gama de los mismos, acumulando conocimientos de diversa índole, que les serán útiles en su desempeño legislativo y eventualmente ejecutivo. Pero México no puede ya darse el lujo de mantener una clase política renacentista y diletante, que en toda materia es sabia merced a su ausencia de especialización. Con reelección, la circulación de cuadros se dará en función del juicio que el electorado haga respecto a la valía de sus representantes. Sin reelec-

ción, en cada ciclo electoral habremos de pagar la curva de aprendizaje de casi la totalidad de los mismos.

Y de ahí deviene otra supuesta virtud de la ausencia de reelección, a saber, el que los partidos sean cohesivos y disciplinados, promoviendo la gobernabilidad. Claro está que la circulación horizontal y el amateurismo que resultan de este arreglo son en principio funcionales para los liderazgos partidistas, disminuyendo los incentivos a la indisciplina parlamentaria. Pero resulta claro también que el exceso de disciplina es costoso para los propios partidos en el mediano plazo, ya que hace posible que se materialice la corrupción del liderazgo político al aislarlo en exceso de las presiones por satisfacer eficazmente a sus correligionarios. Además, debe recordarse que todo político electo –con reelección o sin ella– tiene en principio ambiciones futuras, mismas que pueden plantearle acciones divergentes que las que su liderazgo espere de él. Lo que implica la ausencia de reelección es que dichas ambiciones nunca estarán vinculadas a la satisfacción de demandas electorales concretas, lo cual impide *de facto* que el voto dicte programas de acción gubernamental.

De lo anterior resulta que no hay fundamento válido para impedir la reelección inmediata en todos los cargos gubernamentales, la Presidencia de la República inclusive. Modernizar nuestra política implica trascender el simple conteo legítimo del sufragio. Es necesario ahora permitirle convertirse en juez ineludible de las carreras políticas de nuestros representantes. Solamente así tendremos la posibilidad de juzgar con claridad su desempeño, motivándoles también a su especialización y profesionalización.

Además de las anteriores virtudes de la reelección, la menos discutida de ellas es quizá la más importante, y es la que se refiere a las enormes ganancias en transparencia que se obtendrían de su implementación. En un sistema con reelección, el paso casi indispensable para que una persona acceda a un cargo público es que logre vencer a otra que se encuentra en funciones y busca su permanencia en él. Así, el acceso a la información pública –elemento esencial en la dieta básica de la anhelada modernidad política mexicana– deja de ser una graciosa concesión gubernamental o el insumo privilegiado de aquellos medios de comunicación que sí investigan. Muy por el contrario,



## Para el sufragio efectivo...

la inversión que los aspirantes hacen en criticar y cuestionar la gestión de los electos se convierte en la más valiosa herramienta ciudadana para limitar los abusos y promover la eficiencia de los aparatos partidarios.

En su origen, el argumento en favor de la reelección parte de las mismas razones por las que la democracia es un sistema político preferible a cualquier otro. La incertidumbre de la permanencia en el cargo –aunada a la posibilidad anhelada de lograrlo– impulsa a los actores a trabajar en servicio de quienes determinan dicha permanencia. Con reelección inmediata, dicho poder se devuelve de los liderazgos partidarios a las bases ciudadanas, restableciendo así la conexión electoral que el propio sistema democrático supone.

Al desprestigio que acompañaría a la ausencia creciente de dicha conexión seguirían también mayores temores del surgimiento de figuras populares y demagógicas que, denunciando los fracasos de la democracia partidista, ofrezcan paraísos autárquicos a una ciudadanía harta del letargo gubernamental. Sin duda, el mejor antídoto para esta posibilidad radica no en mantener, sino en retirarle a los partidos el monopolio absoluto de las candidaturas. La posibilidad de candidaturas independientes para las presidencias municipales significaría un acicate al fortalecimiento interno de los partidos, alertándoles contra el riesgo de su propio anquilosamiento en un área donde el valor de una representación partidista es menos indispensable para garantizar una buena gestión, sentando a su vez las bases para un proceso de reclutamiento político mucho más fluido. De conservarse el monopolio total de las candidaturas, aunado a las rigideces prevalecientes en el reclutamiento, se mantendrán también los incentivos a promover plataformas abiertamente antipartistas, atractivas tanto para los ciudadanos como para pequeños partidos que hoy carecen de base social.

Por ello mismo resulta insuficiente instaurar procesos de selección de candidatos abiertos al voto directo de la militancia o incluso de la ciudadanía. La mayoría de las veces ellas resultan en arcaicos ejercicios intrapartistas de movilización y arrastre que en forma alguna generan legitimidad. Si lo que se desea con dichos ejercicios es acercar más al electorado con sus partidos,

deben a su vez disminuirse los recursos de los liderazgos centrales para excluir a candidaturas indeseables que contiendan con éxito dentro del aparato partidario. La sola amenaza de candidatos desligados de las burocracias centrales de los partidos moverá a éstas a vigorizar sus estrategias de vinculación ciudadana.

Otro elemento indispensable para la democratización de la vida partidaria es también la modernización de sus finanzas. El enorme monto de financiamiento público que hoy en día se les dedica, tanto a nivel federal como en cada una de las entidades, pasa muy por encima de lo necesario para cubrir el propósito original de su establecimiento, que era el de garantizarle a la oposición fondos suficientes para competir contra un partido que contaba con el pleno apoyo de todo el aparato estatal, tanto para sufragar sus propios gastos como para perseguir a quienes financiaran a sus adversarios. Más aún, este propósito original parece hoy carecer de sentido.

Contra la idea de reducir el financiamiento público de las actividades partidarias existe el argumento de la supuesta privatización o franca ilegalización de la política. Pero el esquema actual no impide dichos riesgos, sino que más bien los oculta, al subsidiar generosamente la actividad de los privados y concentrar la fiscalización de los dineros en el cumplimiento de los topes de campaña. No olvidemos tampoco que todo intento por disminuir artificialmente los ingresos y gastos en las actividades partidarias traerá consigo enormes ventajas –y mayores incentivos– al uso político-electoral de las burocracias públicas.

Mucho mejor sería contar con un esquema que empujara a los partidos a buscar dinero directamente entre los distintos intereses sociales, diversificando el costo y transparentando esta actividad, y fiscalizar los ingresos de los políticos en lo individual, a la vez que usar los recursos públicos fundamentalmente para garantizarles a todos tiempos mínimos en espacios atractivos de la radio y la televisión.

Pero quedan muy claras las razones por las cuales no tendríamos esta serie de reformas en el corto plazo. Más allá del tratamiento inteligente que se pueda hacer del conjunto de estos temas ante la opinión pública, los partidos actuales se encuentran divididos en su interior en más de una dimensión, y la pro-

Para el sufragio efectivo...

puesta reeleccionista los parte además entre quienes hoy detentan cargos y quienes aspiran a ellos. Menos optimista es aún el escenario para una reforma en el financiamiento, que obligaría a los políticos a renunciar al generoso amparo de la transferencia gubernamental.

Pero el inmovilismo partidario conllevaría el peligro de la creciente insatisfacción ciudadana con las opciones políticas existentes. No deben nuestros partidos desdeñar la lección central del proceso argentino contemporáneo, así como las que resultan de los casos venezolano, peruano y colombiano de años recientes: la auténtica fuerza de los partidos no radica en su capacidad para aislarse de los intereses sociales, sino para expresar con transparencia y eficacia sus demandas y expectativas. El mejor ejemplo de una dinámica de este tipo se encuentra en los casos de los Estados Unidos y Brasil, donde a pesar de que la opinión de la ciudadanía con respecto a sus órganos de representación no es muy favorable, lo contrario sucede con la opinión referente a sus representantes en lo particular. Y ése no es para nada un activo deleznable. ✍